

Crimen del exteniente Ronald Ojeda

Más especulaciones que certezas: los lazos entre el gobierno chavista y el Tren de Aragua

En los supuestos nexos hay versiones de testigos que involucran a autoridades con la banda criminal, inferencias e interpretaciones, pero poca claridad sobre vínculos concretos.

GASPAR RAMÍREZ

“Finalmente, en la cúpula de la estructura, están los principales. En Tocarón hay tres principales y el Niño Guerrero es el más importante y poderoso de ellos”, escribe en su libro “El Tren de Aragua” (Planeta, 2013), la periodista venezolana Ronna Rísquez, y en la página siguiente cita a una testigo que vivió en la cárcel de Tocarón, que hasta septiembre pasado fue el centro de operaciones de la principal banda de crimen organizado de Venezuela: “Pero hay un pran mayor que está afuera, el creador de este mecanismo —dice Roxana—. Todos piensan que es la ministra (del Poder Popular para el Servicio Penitenciario), pero yo a ella la llamaría ‘lucero de la alta’, porque el pran mayor está más arriba en el Gobierno y sus tentáculos son internacionales. Fue gobernador de Aragua. Dos veces mis ojos lo vieron (en el penal en 2017) y al decirte esto mi vida corre peligro”.

“Pran”, líder de los grupos criminales que operan y controlan las cárceles de Venezuela; “luceros de la alta”, segundos en la estructura jerárquica; Héctor “Niño” Guerrero, el principal cabecilla del Tren de Aragua que se fugó de la cárcel de Tocarón antes de que 11 mil efectivos de seguridad retomaran el control de esa prisión. Términos y nombres familiares para los chilenos desde que el 21 de febrero pasado el exteniente venezolano Ronald Ojeda fue secuestrado desde su departamento en Independencia, Santiago, por personas vestidas como agentes de la PDI, y más aún después que la hipótesis de que el Tren de Aragua y el gobierno venezolano podrían estar detrás del crimen, con un móvil político que aún está en investigación y que llevó a mirar los posibles lazos entre el chavismo y esa banda que tiene extensiones en países como Colombia, Perú y Chile. Nexos sobre los que hay pocas certezas y muchas especulaciones, como las que involucran a políticos.

Ni la testigo ni la autora del libro dicen quién podría ser ese “pran mayor”, pero la ministra de Servicios Penitenciarios más poderosa del chavismo fue la actual diputada Iris Varela, nombrada en el cargo por el fallecido Hugo



EL RÉGIMEN llevó a cabo un megaoperativo el año pasado en la cárcel Tocarón, hasta ese entonces centro de operaciones del Tren de Aragua en Venezuela.

Chávez en 2011; y el gobernador del estado de Aragua en los años de consolidación del grupo criminal fue Tarek el Aissami, hoy caído en desgracia por la corrupción en la petrolera estatal.

Creación

“Por lo menos por omisión, son responsables de la extensión tan grande que ha tenido el Tren de Aragua”, dice Carlos Nieto Palma, coordinador general de Una Ventana a la Libertad, ONG que vigila la situación en las cárceles de Venezuela, en alusión a los lazos entre el gobierno y la agrupación de “Niño” Guerrero. El abogado especialista en derechos humanos admite que “realmente no tenemos datos ciertos de que exista una relación directa entre el Tren de Aragua y el gobierno de Maduro. Lo que sí tenemos claro es que el Tren de Aragua se creó y se extendió ya finalizando el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) y en el desarrollo del de Maduro (2013 hasta ahora). En la época que Iris Varela era la ministra del Servicio Penitenciario”.

María Iris Varela Rangel (San Cristóbal, 1969) dirigió la administración de las prisiones desde la creación de la carcer, en 2011 y hasta 2017, y luego entre 2018 y 2020. Entonces fue sucedida por Mirelys Contreras, pero, según Nieto, Varela era “el poder en las sombras”, hasta marzo de 2023, cuando Contreras fue reemplazada por la viceministra Celsa Bau-

tista, y los militares se hicieron cargo del tema. Siete meses después sería el operativo en la cárcel de Tocarón.

En el último capítulo de su libro, Rísquez incluye una entrevista con Varela, en que la ministra defiende su trabajo por controlar las cárceles.

“En consonancia con su confesión, Varela, no solo en su discurso, sino también en la práctica, ha hecho intentos por mantener las prisiones bajo control del Estado. En uno de esos intentos por recuperar el orden, les dijo a los presos de Tocarón: ‘Aquí la única pran soy yo’, contó Yandris”, escribe la periodista, que cita a un exmiembro de la banda criminal.

Mientras que el gobernador de Aragua entre 2012 y 2017, Tarek el Aissami (Mérida, 1974), era la figura ascendente del chavismo desde que inició su carrera como diputado, en 2006. El abogado de origen sirio-libanés fue viceministro, titular de Interior, vicepresidente, ministro de Economía y del Petróleo, hasta que en marzo de 2023 renunció para que la justicia investigara las acusaciones por malversación de US\$ 3 mil millones durante su gestión petrolera.

No tuvo más apariciones públicas, pero el asesinato de Ronald Ojeda lo trajo de vuelta a las noticias: La fiscalía chilena identificó a Walter Rodríguez Pérez como el líder del grupo al que se le atribuye el crimen del exteniente, y según la web del Instituto Venezol-

lano de los Seguros Sociales, trabajó en 2015, durante siete semanas, como “GE despacho del gobernador” de Aragua.

“Se dice que El Aissami fue el creador o el que le dio fuerza a lo que es el Tren de Aragua”, dice Sebastiana Barráez, periodista venezolana experta en temas de seguridad, y comenta que es difícil determinar qué significa exactamente ese “GE”, ya que “las gobernaciones tienden a usar diferentes nombres, por ejemplo, son funcionarios que no tienen un nombre específico en el caso de las gobernaciones, pero sin duda no es un funcionario de alto nivel”.

Dos años después, en 2017, vendría otro de los hechos con pocas certezas sobre la relación entre el chavismo y el Tren de Aragua.

Las protestas

“Roxana está convencida de que ese supuesto gran jefe visitó el penal para obtener ayuda de la banda en la represión a las protestas que dejaron 163 muertos y 3.000 detenidos en 2017: ‘Los pechos (conflictos) que había en el país fueron frenados desde la Casa Grande’. En efecto, varios defensores de derechos humanos, medios de comunicación y funcionarios que desertaron de las fuerzas de seguridad han denunciado que el gobierno de Maduro recurrió a alianzas con grupos armados no estatales, como la megabanda de alias ‘Koki’ y los muy conocidos

‘colectivos’ (paramilitares activos desde los años de Chávez).

Estos grupos actuaron solos o junto a funcionarios policiales y militares en el control de las protestas, coinciden las denuncias.

“Yo creo que ese poder que ellos tienen es lo que mantiene al gobierno en pie —dice Roxana—”, escribe Rísquez en su libro.

Venezuela vivió en 2017 las

mayores protestas sociales contra el chavismo en tres años, luego que el oficialismo instalara una Asamblea Nacional Constituyente para neutralizar al Legislativo controlado por la oposición desde 2015. Organizmos de derechos humanos denunciaron la violencia con que el gobierno reprimió las protestas. Ese año hubo una inflación de 2.600%, según el Observatorio Venezolano de Violencia hubo 89 muertes violentas por cada 100 mil habitantes y sería el inicio de la tercera y mayor ola migratoria reciente desde ese país.

Denuncias similares hubo en febrero de 2019, cuando el entonces autodesignado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, lideró un intento para ingresar ayuda humanitaria a través de Cúcuta, Colombia. La oposición acusó que el gobierno llevó pre-

sos hasta la frontera para impedir que pasaran los cargamentos, mientras que el chavista Freddy Bernal, gobernador de Táchira (límite con Colombia), aseguró que los contrarios a Maduro utilizaron reos como fuerza de choque.

“En la frontera, el chavismo sí activó los grupos paramilitares conocidos como ‘colectivos’. De eso hay videos y fotos de gente disparando. Pero no hay pruebas sobre la utilización de presos”, comenta Marino Alvarado, coordinador de la ONG Provea, y dice lo mismo sobre la presencia de reos en las protestas de 2017: “Eso fue más rumor, no hay nada concreto que indique que eso haya sido cierto”.

Ronna Rísquez apunta en el mismo sentido. La periodista, que todavía vive en Venezuela, dice a este diario que la declaración de “Roxana”, es “el testimonio de una de las personas que yo entrevisté, y bueno, obviamente ese testimonio fue validado con otras personas también, pero es el testimonio de alguien, o sea, es una persona la que habla, no soy yo”.

Rísquez se refiere, también, a las sospechas sobre el papel que tendrían El Aissami o Varela en el surgimiento del Tren de Aragua, según se desprende de las personas que entrevistó para su libro: “Bueno, no se puede decir que hay una relación, porque no hay ninguna prueba de ninguna relación”.

En el libro “El Tren de Aragua” hay dudas planteadas directamente como preguntas, como en la página 203, que dice: “Los ingresos de manera legal a Chile de Larry Changa (otro pran del Tren) y alias ‘Estrella’, con un pasaporte a nombre de una persona que no existe, Carlos González Vaca, muestran otra arista dentro del proceso de expansión. ¿De qué modo estas dos personas obtuvieron pasaportes venezolanos antes

de mediados de 2021, mientras millones de connacionales esperaron años para conseguir ese documento de identidad? Y la otra pregunta es: ¿qué dicen los registros de antecedentes penales de estos exconvictos? y ¿cómo los obtuvieron? Esto lleva a suponer la existencia de una estructura de corrupción que les facilitaría los pasaportes y limpiaría sus antecedentes”.

Y sobre el caso que remecede desde hace semanas a la justicia, policías, gobierno y la sociedad de Chile, el asesinato del exteniente Ojeda, Rísquez también tiene dudas: “No creo que el Tren de Aragua, como organización criminal, tuviera que involucrarse en este caso. No le encuentro una razón, y las particularidades del caso no son las habituales en la actuación de un grupo como el Tren de Aragua”.

RED EN LA REGIÓN

A partir de 2019, debido a la crisis en Venezuela, se estima que la organización criminal decidió expandirse al resto de Latinoamérica.